



OFICINA PARA EL MONITOREO Y LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

## Informe sobre Trata de Personas 2019

---

### ARGENTINA: Categoría 1

El Gobierno de Argentina cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas. Durante el periodo que abarca el presente informe, el gobierno continuó realizando acciones importantes y constantes y consecuentemente, Argentina permanece en la Categoría 1. Dichas acciones consistieron en aumentar el número de investigaciones, juicios y condenas, incluso de funcionarios cómplices, e identificar y prestar asistencia a más víctimas. Si bien el gobierno cumple los estándares mínimos, no asignó un presupuesto específico para su plan de acción nacional ni tampoco prestó a las víctimas, asistencia integral, especializada y completa a mediano y largo plazo, inclusive a las víctimas de sexo masculino. La complicidad oficial en materia de delitos relacionados con la trata continuó siendo motivo de gran preocupación y la ley contra la trata continuó presentando incongruencias con el protocolo de Naciones Unidas contra la trata de personas, al estipular que el uso de la fuerza, el fraude o la coerción constituyen factores agravantes y no elementos esenciales del delito.

### PRINCIPALES RECOMENDACIONES

Fortalecer los esfuerzos destinados a investigar, procesar, condenar y castigar a los funcionarios cómplices de delitos de trata; proporcionar fondos suficientes para ejecutar cabalmente el plan nacional de acción; mejorar la asistencia a las víctimas para incluir refugios más especializados, en particular refugios específicos para víctimas del sexo masculino; aumentar la disponibilidad de asistencia a mediano y largo plazo para las víctimas, incluida la asistencia legal, médica y laboral; incrementar el número de inspecciones laborales y garantizar la realización de inspecciones en zonas rurales; fortalecer la coordinación entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales y las ONG; mejorar los procedimientos de resarcimiento para las víctimas; fortalecer las iniciativas para reunir e integrar datos relacionados con los esfuerzos de protección y asistencia de las víctimas; revisar la configuración del delito de trata según la ley argentina de manera de adecuarla más a la definición del Protocolo contra la Trata de Personas de las Naciones Unidas del año 2000.

### PERSECUSION PENAL

El gobierno aumentó los esfuerzos en materia de aplicación de la ley. La Ley 26.842 de 2012 penaliza todas las formas de trata de personas con fines de explotación laboral y sexual y establece penas privativas de la libertad que van de 4 a 8 años de prisión para delitos que involucren a una víctima adulta, y penas de entre 10 y 15 años para delitos que involucren a una víctima menor de edad. Dichas penas fueron suficientemente severas y respecto a la trata con fines de explotación sexual, las penas se equiparan con las establecidas para otros delitos graves tales como la violación. A diferencia de la



## U.S. DEPARTMENT OF STATE

DIPLOMACY IN ACTION

definición de trata según el derecho internacional en la materia, la Ley 26.842 establece que el uso de la fuerza, el fraude y la coerción constituyen factores agravantes y no elementos constitutivos del delito. Las penas se incrementan de 5 a 10 años de cárcel ante la presencia de alguno de esos factores. La ley también brinda una definición amplia de la trata que incluye la facilitación o el usufructo de la prostitución de terceros y la venta ilegal de órganos, independientemente del uso de la fuerza, fraude o coerción. Debido a estas inclusiones, se desconoce cuántos de los casos procesados en virtud de la Ley 26.842 correspondieron a delitos de trata según la definición de la legislación internacional.

El Ministerio de Seguridad informó sobre su cooperación con autoridades judiciales en 3.254 investigaciones preliminares de trata durante el período que abarca el informe, en comparación con 3.130 investigaciones de la misma índole en el período anterior. La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) abrió 332 investigaciones preliminares, en comparación con 237 en 2017. El Ministerio de Seguridad determinó 49 casos de trata de personas (33 casos con fines de explotación laboral y 16 con fines de explotación sexual) e inició acciones judiciales. Las autoridades presentaron acusaciones formales contra 106 presuntos responsables del delito de trata (71 con fines de explotación sexual, 19 con fines de explotación laboral, 8 por las dos calificaciones y 8 por matrimonio forzoso) en virtud de la ley de prevención y sanción de la trata, en comparación con 63 casos en 2017 (35 por trata con fines de explotación sexual y 24 por trata con fines de explotación laboral). También condenó a 71 responsables del delito de trata en 48 casos (30 con fines de explotación sexual y 18 con fines de explotación laboral), frente a 38 responsables del delito en 32 casos en 2017. La condena promedio fue de cinco años y medio de cárcel y la mayoría de las condenas derivaron en penas privativas de la libertad de cumplimiento efectivo que excedieron los seis años. Según la ley argentina, los condenados con sentencia menor a tres años por cualquier clase de delito son pasibles de obtener una suspensión de la ejecución de la pena; 8 % del total de condenas por el delito de trata de personas no alcanzaban los tres años y, por ende, fueron suspendidas.

La corrupción y la complicidad oficial en delitos relacionados la trata siguieron siendo motivo de gran preocupación, si bien el gobierno logró avances en dos causas informadas previamente y tres causas nuevas. En una de ellas, el tribunal de apelaciones revocó la sentencia absolutoria que recaía sobre inspectores laborales en un caso de trata. En una segunda causa relacionada con la participación de dos miembros de las fuerzas de seguridad y el poder judicial, el tribunal federal de apelaciones confirmó la acusación formal y elevó la causa a juicio. En una tercera causa, el tribunal federal inculpó a un juez de un tribunal de faltas por complicidad en un caso de trata con fines de explotación sexual. La cuarta causa se relacionó con la acusación formal de un alcalde por parte de un tribunal federal por motivos de trata con fines de explotación sexual. En una quinta causa, actualmente en su etapa investigativa, los fiscales interpusieron una demanda en un caso de trata laboral que implicaba la participación de funcionarios gubernamentales de la ciudad y provinciales. Sin embargo, se denunciaron otros casos de complicidad. Fiscales iniciaron investigaciones sobre una red de trata de personas con fines de explotación sexual en la provincia de Santa Fe, que implicaban la complicidad de un alcalde, pero el tribunal local lo absolvió. Se investigó un segundo caso de presunta trata con fines de explotación sexual en la cárcel de Melchor Romero que involucraba a oficiales penitenciarios; sin embargo, las fuerzas del orden no encontraron pruebas para sustentar el caso. Otra causa suponía la complicidad de un juez federal para facilitar la comisión de delitos de trata con fines de explotación sexual por parte de un comisario retirado de la Policía. Un tribunal desestimó las acusaciones contra el comisario, aunque PROTEX apeló la



## U.S. DEPARTMENT OF STATE

DIPLOMACY IN ACTION

desestimación y el juez fue sancionado solo con el pago de una multa. El gobierno brindó numerosas capacitaciones en materia de lucha contra la trata de personas a las fuerzas de seguridad, fiscales y funcionarios judiciales, entre otros destinatarios. La ministra de Seguridad y el Procurador General suscribieron un acuerdo para aprobar directrices generales para la realización de allanamientos relacionados con delitos de trata. La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina trabajó en la elaboración de una base de datos nacional sobre los casos de trata de personas sustanciados en la justicia desde 2015. Durante el año, PROTEX colaboró en 26 investigaciones internacionales sobre casos de trata.

### PROTECCIÓN

El gobierno aumentó los esfuerzos de protección. El Programa de Rescate y Acompañamiento fue la oficina gubernamental encargada de coordinar los servicios de asistencia inmediata para las víctimas. En 2018, informó haber asistido a 1.501 víctimas (972 con fines de explotación laboral, 522 con fines de explotación sexual y 7 casos de explotación no especificados), en comparación con 1.107 víctimas en 2017 y 666 en 2016. El Ministerio de Producción y Trabajo informó haber identificado a 215 víctimas, todas personas adultas y la mayoría en comercios rurales, que mostraban indicios de trata laboral. El Ministerio de Seguridad informó que los operativos de las fuerzas del orden realizados durante el año dieron lugar a la identificación de 786 víctimas (173 víctimas de trata con fines de explotación sexual, 542 de trata laboral y el resto sin especificar). La mayoría de ellas (492) eran extranjeras. El Ministerio de Salud y Desarrollo Social (SENNAF – Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia) está a cargo de la identificación y asistencia a las víctimas extranjeras. La SENNAF identificó y prestó asistencia a 47 víctimas extranjeras, en comparación con 80 en 2017. En 2018, la SENNAF prestó asistencia y financió la repatriación de 33 víctimas. En ausencia de una base de datos unificada sobre víctimas de la trata, el gobierno no informó si las cifras del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Producción y Trabajo y de la SENAF estaban incluidas en el total de víctimas identificadas por el Programa de Rescate y Acompañamiento. El nuevo plan de acción nacional procuró crear una base de datos unificada para hacer un seguimiento de las víctimas.

La Ley 27.362, promulgada en julio de 2017, proporcionó un marco jurídico y más defensores públicos para proteger los derechos y las garantías de las víctimas de delitos en general, incluidas las víctimas de la trata de personas. Sin embargo, la ley no fue utilizada en ningún caso de trata de personas durante el periodo del presente informe. Si bien los funcionarios federales contaron con procedimientos formales para la identificación y asistencia de víctimas, en la práctica, los procedimientos de identificación de víctimas entre poblaciones vulnerables variaron según la provincia en cuestión. Algunos funcionarios que brindan asistencia inicial a las víctimas tenían un conocimiento limitado sobre la trata. La SENNAF junto a cada gobierno provincial, estuvo a cargo de la asistencia a mediano y largo plazo para víctimas extranjeras y argentinas; sin embargo, los expertos indicaron la necesidad de disponer de servicios de asistencia para las víctimas más integrales y completos. Los gobiernos regionales de 10 provincias dirigieron centros de lucha contra la trata, que prestaron asistencia psicológica, social, médica y jurídica a las víctimas de ese delito. El gobierno contaba con 10 refugios distribuidos en diversas provincias a los que podían acceder las víctimas de la trata; sin embargo, solo dos de esos refugios eran especializados. La SENNAF informó haber administrado un refugio específico para víctimas extranjeras de cualquier sexo o edad. No hubo ningún otro refugio especializado para víctimas del sexo masculino; por lo tanto, el gobierno con frecuencia



## U.S. DEPARTMENT OF STATE

DIPLOMACY IN ACTION

alojó temporariamente a las víctimas del sexo masculino en otros refugios administrados por el gobierno o en hoteles. Organizaciones no gubernamentales informaron sobre la necesidad de refugios especializados, alojamiento a largo plazo, capacitación en oficios y empleo, cuidado infantil, asesoramiento jurídico y asistencia financiera a las víctimas después de haber brindado declaración testimonial ante la Justicia. Las ONG también destacaron la necesidad de que el gobierno mejore la ejecución de un programa de protección de testigos que garantice seguridad adecuada para las víctimas durante los procesos judiciales. Las víctimas extranjeras tuvieron el mismo acceso a servicios de asistencia que sus contrapartes argentinas; sin embargo, ocasionalmente, las víctimas extranjeras desconocían los servicios disponibles. El gobierno no informó sobre asignaciones de fondos para la asistencia a las víctimas.

El gobierno alentó la participación de las víctimas en los procesos judiciales de sus captores al asistirles durante su declaración inicial y las subsiguientes presentaciones ante la Justicia. El Programa de Rescate y Acompañamiento brindó a la Justicia informes sobre el estado psicológico de las víctimas y sobre los requisitos necesarios para asistir en la causa contra sus captores. Otra clase de apoyo para que las víctimas brindaran su testimonio incluyó la posibilidad de prestar declaración a través de videoconferencias y mediante audio grabado. Las víctimas podían reclamar indemnización mediante el inicio de acciones civiles contra sus captores. Los casos que prosperaron con dicho procedimiento fueron pocos. Los observadores indicaron que los tribunales inferiores podrían desestimar cuestiones de indemnización por varios motivos; entre ellos, no saber calcular el monto adecuado o considerar penas de prisión como una resolución adecuada. Un proyecto de ley de 2017 relativo al resarcimiento para las víctimas de la trata perdió estado parlamentario en 2018. Sin embargo, en octubre de 2018, el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata redactó un proyecto de ley que se presentó ante el Congreso, destinado a crear un fondo fiduciario de asistencia para las víctimas de trata. El fondo incluiría los bienes incautados de los responsables de la trata y serviría a los efectos de reparación para las víctimas.

### PREVENCIÓN

El gobierno intensificó las acciones de prevención. El Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas realizó cuatro reuniones en provincias diferentes, en comparación con una sola reunión celebrada en 2017. En julio de 2019, el gobierno implementó el Plan Nacional contra la Trata y Explotación de Personas 2018-2020, pero no le asignó un presupuesto especial. La capacidad del gobierno de financiar sus programas de lucha contra la trata siguió siendo motivo de preocupación para los observadores. Estos indicaron que algunas ONG no estaban satisfechas con el grado de participación de esas organizaciones en la labor del gobierno en materia de lucha contra la trata de personas. En marzo de 2018, el gobierno creó una nueva secretaría bajo la órbita del Ministerio de Producción y Trabajo, que proporcionó orientación, realizó inspecciones laborales y elaboró planes para la promoción de condiciones de trabajo seguras y éticas. En junio de 2018, la nueva secretaría estableció un código de ética para trabajadores que desempeñan funciones oficiales destinadas a mejorar la rendición de cuentas respecto de la complicidad de funcionarios en asuntos de trata de personas. Además, la Secretaría de Trabajo emitió nuevas directrices y formularios electrónicos estándar para las inspecciones laborales nacionales, a fin de ayudar a determinar indicios de trata durante esos procedimientos. Los formularios también proporcionaron un registro documental que puede utilizarse en labores de investigación penal y de asistencia a las víctimas. La Dirección Nacional de Migraciones elaboró mejores controles y contabilidad



para los trabajadores migrantes a fin de evitar la trata de personas con fines de explotación laboral. Las autoridades sancionaron a reclutadores extranjeros de mano de obra por contratación fraudulenta.

El gobierno implementó varias campañas nuevas de concientización sobre la trata de personas a nivel nacional, provincial y municipal, destinadas a ONG, grupos de la sociedad civil, estudiantes secundarios, universitarios y niños. Las ONG y expertos siguieron manifestando preocupación acerca del turismo sexual infantil, si bien durante el período del informe no se informó respecto de investigaciones o acciones penales relacionadas con ese delito. La Secretaría de Turismo desarrolló capacitaciones en materia de prevención de la trata para el sector del turismo y colaboró con organizaciones internacionales y hoteles en la redacción de mejores prácticas para que los hoteles eviten el turismo con fines de explotación sexual de menores. La provincia de Neuquén aprobó una ley para reforzar el seguimiento de los huéspedes de hoteles que viajan con menores que no son sus hijos. PROTEX continuó operando el sistema nacional de líneas telefónicas gratuitas para recibir denuncias a nivel nacional con derivación articulada con el Programa de Rescate y Acompañamiento. Durante el año se recibieron 1.858 llamadas relacionadas con la trata de personas, de las cuales 522 fueron remitidas a tribunales federales y 440 a tribunales provinciales. Durante el período que abarca el presente informe, el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata redactó por primera vez su primer informe anual, que presentó ante la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados en noviembre de 2018. El gobierno no tomó medidas para reducir la demanda comercial de servicios sexuales si bien realizó esfuerzos tendientes a reducir la demanda del trabajo forzoso.

## PERFIL DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS

Como se informó durante los últimos cinco años, los tratantes de personas explotan a víctimas nacionales y extranjeras. En menor medida, existen hombres, mujeres y niños argentinos que son víctimas de la trata con fines de explotación sexual y laboral en otros países. Los tratantes explotan a víctimas de otros países de América Latina en Argentina, en particular personas provenientes de República Dominicana, Paraguay, Perú, Bolivia, Uruguay, Venezuela y Brasil. Ciudadanos transgénero de origen argentino son víctimas de la trata con fines de explotación sexual dentro del país y en Europa occidental. Hombres, mujeres y niños de Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú y otros países son sometidos a trabajos forzados en diversos sectores que abarcan talleres clandestinos, agricultura, venta ambulante, producción de carbón vegetal y ladrillos, tareas domésticas y pequeños emprendimientos. Los responsables de la trata explotan sexualmente a menores que integran clubes deportivos nacionales. También los ciudadanos chinos que trabajan en supermercados son víctimas de servidumbre por deudas. Los tratantes obligan a sus víctimas a transportar drogas a través de las fronteras nacionales. La complicidad oficial, principalmente a nivel provincial y municipal, continúa siendo un obstáculo para los esfuerzos gubernamentales destinados a combatir la trata de personas. El descubrimiento en 2018 de una red activa de prostitución en las ligas menores del fútbol argentino, que victimizaba a deportistas jóvenes, generó preocupación sobre la trata con fines de explotación sexual de menores en el deporte y en los clubes deportivos nacionales.